

El proceso español

Juan Milián



La catalanización de
la política española y
el desmantelamiento de
la España de la Transición

DEUSTO

El proceso español

La catalanización de la política española
y el desmantelamiento de la España
de la Transición

JUAN MILIÁN QUEROL



EDICIONES DEUSTO

© Juan Bautista Milián Querol, 2021

© Centro de Libros PAPP, SLU., 2021

Deusto es un sello editorial de Centro de Libros PAPP, SLU.

Av. Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-234-3240-0

Depósito legal: B. 7.979-2021

Primera edición: junio de 2021

Preimpresión: Realización Planeta

Impreso por Romanyà Valls, S. A.

Impreso en España - *Printed in Spain*

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como **papel ecológico** y procede de bosques gestionados de manera **sostenible**.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Sumario

Introducción.....	7
1. Historia de una negación.....	15
2. El populismo de los narcisos.....	71
3. Se repite esta misma historia.....	113
4. El alma de la libertad.....	161
Epílogo.....	209
Agradecimientos.....	215
Bibliografía.....	217

Capítulo 1

Historia de una negación

A las 17.00 horas del 17 de agosto de 2017 una furgoneta entraba en el tramo central de La Rambla de Barcelona. No había bolardos ni nada que impidiese la tragedia que se iba a perpetrar. Tras dejar un reguero de sangre y muerte a sus espaldas, el conductor, el terrorista Younes Abouyaaqoub, cruzaría a pie el barrio El Raval y aún asesinaría a una persona más, la decimoquinta, a la que le robaría el coche. El islamismo golpeaba en el corazón de la capital catalana y toda España se estremecía. El atentado tendría una secuela en Cambrils. En total, 16 muertos cuya memoria sería respetada durante unas horas, unas pocas horas. El dolor de las familias y de una sociedad conmocionada pronto pasaría a un segundo plano. La élite independentista no iba a permitir que una tragedia como ésta estropeará el que iba a ser su gran otoño, el otoño de la República catalana.

Tras años de tensión identitaria, algo no funcionaba en esta sociedad. El proceso independentista nos había saturado emocionalmente tanto a los nacionalistas como a los consti-

tucionalistas. La política se había metido en todos los rincones de nuestras vidas, enrareciendo las relaciones familiares, las comunidades de vecinos y los ambientes laborales. Durante mucho tiempo no hubo conversación que no desembocara agriamente en el dichoso monotema. El nacionalismo se había acostumbrado a actuar sin contención moral; lo embrutecía todo con su manipulación y su perversión de la identidad. La fractura entre catalanes alcanzó tal nivel que ni el duelo por las víctimas de un atroz atentado iba a darnos la más mínima tregua. Todo debía estar al servicio de la misma causa. Todo era explicado por esa causa. El *conseller* de Interior, Joaquim Forn, distinguió entre víctimas españolas y víctimas catalanas. «Dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española», declaró en una entrevista a TV3. Imponían el fastidioso relato incluso en el momento más inoportuno. La asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) pidió en Twitter que no se usara la bandera española para mostrar solidaridad con las víctimas. Sólo les parecían legítimas la *senyera* o la *estelada*, la bandera oficial de Cataluña o la independentista. Ni un respiro al pluralismo. Al enemigo, ni agua.

El control que ejercía el independentismo de la agenda mediática era asombroso. En lo que llevamos de siglo, ningún movimiento europeo ha alcanzado un dominio de la agitación y la propaganda como el subvencionado por la Generalitat de Cataluña. La radicalización islamista en el seno de nuestra sociedad o los posibles fallos en la seguridad y la vigilancia nunca llegaron a consolidarse en el debate público. La identidad alterada siempre reduce la responsabilidad a su mínima expresión. Enseguida se elevó al mayor de los

Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a los altares patrios por contestar: «Bueno, pues *molt bé*, pues adiós» a un periodista holandés que, ajeno al genio nacionalista, cometió la imprudencia de protestar por el uso del catalán en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Para el nacionalismo, la identidad siempre está por encima de la comunicación, por encima de la eficacia policial, por encima de la gestión económica, por encima de la excelencia educativa, por encima de la cultura libre, por encima de la lucha contra la pandemia, por encima de todo. La identidad es la medida de todas las cosas para el nacionalista. Quizá le faltó diplomacia al impaciente reportero, pero el nacionalismo magnificó la ofensa. La manipuló y exageró como suele hacer con todo lo que huele a agravio. Al principio dijeron que se trataba de un periodista español. Daba igual. Los reparos de un periodista holandés les servían como prueba de la catalanofobia española, y la respuesta de Trapero se convertiría en una muestra del orgullo y la dignidad de un pueblo que se autopercibía oprimido. Lo convirtieron en un héroe. Se estamparían camisetas con la frase y su cara, al estilo Che Guevara. En el pasado, el jefe de los Mossos ya había obtenido el sello de calidad nacionalista: era el hombre de camisa hawaiana y guitarra en mano que cantaba en torno a una de las famosas paellas de la mediática Pilar Rahola en Cadaqués. Cantaba con Carles Puigdemont y con Joan Laporta. Ahora era un héroe entre héroes. Años después, cuando anunció que había estado dispuesto a detener a Puigdemont en caso de que una orden judicial así lo pidiera, los mismos independentistas lo mandaron al ya abarrotado infierno de los traidores. El nacionalismo no entiende de matices, por-

que se sitúa en un mundo binario. El trabajo y el talento no importan; la afinidad a la causa, recordemos, es el único criterio.

Cuando una sociedad pivota sobre una única cuestión, la discrepancia política acaba degenerando en una profunda fractura moral. Disculparán que parafrasee la expresión de Mario Vargas Llosa, pero así se jodió Cataluña. El no nacionalista no sólo sería un catalán equivocado, sería un mal catalán, incluso una mala persona, un fascista dispuesto a todo para impedir la liberación del pueblo catalán. Esa desconfianza abonaba el terreno a cualquier teoría conspirativa. Las asociaciones y los partidos independentistas alimentaron la paranoia, traspasando todos los límites éticos en la manifestación de rechazo a los atentados. Fue el 26 de agosto. El *establishment* independentista quería evitar que se percibiera la solidaridad del resto de España con los catalanes. Les chafaba el relato de la catalanofobia que cuenta que los catalanes éramos ancestralmente odiados por unos españoles que ni nos entendían ni nos querían entender. Nada debía torcer el plan a pocas semanas del referéndum y de la declaración de independencia. Durante años se había abusado de la expresión «jornada histórica» para definir la *performance* mensual del separatismo, pero ahora sí estaban a las puertas de la historia y todo debía dirigirse a la consecución de ese *momentum*. Algo había que hacer para frenar cualquier tentación de fraternidad, y se hizo. Llenaron la cabecera de la manifestación de banderas independentistas, insultaron al rey y a los políticos constitucionalistas. La mayoría de los catalanes que allí acudimos fuimos a mostrar una sentida solidaridad con las víctimas y

sus familias y un absoluto rechazo al terrorismo, pero el ruido hábilmente estimulado convirtió la manifestación en otro acto de rechazo a España. Si el nacionalismo había manipulado el pasado, cómo no iba a manipular también el presente. Caldearon el ambiente con un odio dirigido a hermanos, amigos y compañeros. No lograrían romper España, pero aquel día consumaron la ruptura de la sociedad catalana. La rabia fue políticamente dirigida contra la convivencia social. Personas que en otros ámbitos de la vida pueden tener comportamientos decentes o incluso modélicos se dejaban arrastrar por la irracionalidad en esta cuestión política. El civismo se esfumó. Insultaron a quienes iban con una bandera española con una furia que nada bueno podía presagiar.

Ese día acompañé a un grupo de aragoneses, afiliados del Partido Popular, que habían venido a mostrar su solidaridad con las víctimas y su cariño a la sociedad catalana. Fui a recibirlos y recuerdo perfectamente sus rostros emocionados cuando bajaban del autobús cerca del paseo de Gracia. Deseaban un reencuentro. Tenían ganas de concordia. Les dolía lo que se estaba viviendo en Cataluña. Me explicaron su relación con Barcelona. Algunos habían trabajado durante su juventud en algún restaurante de la ciudad; otros tenían a sus hijos estudiando en alguna universidad catalana. Las anécdotas y los recuerdos fluían con ternura y nostalgia. Admiraban esta tierra y les entristecía el *procés*. En todo caso, no estaban preparados para lo que se iban a encontrar minutos después. Yo tampoco. El independentismo aplacó cualquier buen sentimiento y diseñó una manifestación de un rencor inaudito. Dinamitaron todos los

puentes con la Cataluña que no se ilusionaba con su utopía rupturista. Tengo grabada a fuego la imagen de personas maduras, incluso mayores, envueltas en *estelades* y gritando a otras personas mayores con banderas españolas: «Vosaltres, feixistes, sou els terroristes», vociferaban. «Vosotros, fascistas, sois los terroristas.» La rabia era real. Era el nacionalismo reconcentrado, el fanatismo desatado, la fractura temida. El diario italiano *La Repubblica* titularía: «Il nazionalismo senza solidarietà». No respetaba ni a los vivos ni a los muertos.

La infamia no quedó ahí. Enseguida promovieron la teoría conspiranoica según la cual el Estado era cómplice o promotor de aquellas muertes. Años más tarde siguen haciéndolo. Recientemente, durante el juicio a los islamistas, se han mostrado vídeos grabados por los propios terroristas mientras preparaban los explosivos, reían y amenazaban en varias lenguas. Una tertuliana de TV3 sólo destaca que el catalán de esos chicos le parece forzado, poco natural. La insinuación es clara para un espectador que apenas vislumbra el exterior de la burbuja: apuntaba a una operación del Estado. El *procés* estuvo lleno de mentiras, pero también de insinuaciones obscenas e inmorales. Cualquier conspiración es creíble dentro del marco mental nacionalista si el Estado aparece como presunto culpable. De este modo, las noticias falsas y la desinformación corren sin obstáculos. El odio permite una credulidad pasmosa.

El Estado era el mal absoluto, pero públicamente se requería al Gobierno español que dialogara. Era un engaño más. Una astucia, diría Artur Mas. La decisión estaba tomada. En realidad, se exigía al Estado que la acatara, que

aceptara la ruptura constitucional y facilitara la separación. La palabra *diálogo* era una simple treta para reforzar la superioridad moral del oprimido y para enredar al incauto corresponsal extranjero. Sin ir más lejos, nunca quisieron dialogar con los catalanes que discrepábamos del *procés*. La animadversión hacia los federalistas equidistantes, por ejemplo, es una prueba de que el nacionalismo no buscaba la negociación, sino la sumisión. Al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le poseía la rabia cuando el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, hablaba de «tender puentes». En los funerales de las víctimas de los atentados, Omella habló de paz, convivencia y amor. El *president* colapsó. Al acabar la ceremonia corrió hacia el arzobispo y, como Greta Thunberg con barretina, le espetó su particular: «How dare you?». «¿Cómo se te ha ocurrido tratarnos en ese tono?», inquirió enfurecido e, inmediatamente, se largó sin esperar la respuesta de su atónito interlocutor. Ésos eran el respeto y la tolerancia que pregonaba.

De hecho, Puigdemont siempre se negó a un diálogo abierto y sincero. Dejaba la silla vacía en la Conferencia de Presidentes autonómicos. Tenía miedo a exponerse públicamente a las razones del otro. A pesar de ser invitado, nunca se atrevió a acudir al Senado o al Congreso a explicar su proyecto, como sí había hecho en el pasado el *lehendakari* Juan José Ibarretxe. Sólo quiso encontrarse con representantes del Gobierno a escondidas, sin luz ni taquígrafos. En la Escuela de Verano de Sociedad Civil Catalana de 2018,¹ el

1. Pueden encontrar la transcripción del diálogo entre Enric Millo y el periodista Albert Castellón en el libro colectivo *En defensa de la democracia* (Editorial Almuzara, 2019).

que había sido delegado del Gobierno de España en Cataluña durante la etapa final del *procés*, Enric Millo, reconoció haber celebrado varias reuniones en privado con Puigdemont: «Él no quería que esos encuentros se hicieran públicos. Prefería mantener las conversaciones en secreto y se lo respeté, aunque él utilizó ese acuerdo de discreción para mantener el discurso de que nosotros no queríamos dialogar. Era como hablar con una pared, todo se reducía siempre a lo mismo, el único interés era votar la independencia en referéndum, no quería hablar de nada más. El diálogo para él era un peligro con demasiado riesgo. Una mentira más del relato secesionista». Según Millo, en esas conversaciones Puigdemont siempre se mostró «decidido a ir a por todas y hasta el final contra el Estado», ya que «de alguna manera ellos pensaban que siempre saldrían ganando, o bien por claudicación del Estado, o por una reacción contundente que les permitiría construir un relato victimista ante la comunidad internacional». En todo momento, Puigdemont buscaba, como él mismo reconocería en sus memorias, el falazmente denominado choque de trenes.

Esta imagen, la de dos locomotoras a punto de colisionar, era fruto de la disonancia cognitiva que siempre caracterizó a los líderes nacionalistas. Por un lado, el nacionalismo llevaba tantos años tratando a España como un Estado fallido que, de alguna manera, llegó a creer que el conflicto sería entre dos fuerzas equiparables. Por otro lado, Puigdemont y gran parte de quienes lo acompañaban cometían la grave equivocación de confundir el Gobierno con el Estado. Es curioso el desconocimiento sobre el funcionamiento de un Estado democrático de aquellos que aseguraban que estaban

construyendo uno. Creían que, una vez vulnerada la ley, el Gobierno español podría rescatarlos y ordenar la marcha atrás de los procesos judiciales. En no pocas ocasiones traté de practicar cierta pedagogía con diputados nacionalistas. Teníamos la oportunidad de charlar prácticamente cada día tras las comisiones parlamentarias o las tertulias radiofónicas, pero era realmente frustrante. Se les advertía de las consecuencias que podía acarrear una declaración de independencia y miraban por encima del hombro: «No se atreverán a meternos en la cárcel», presumían algunos erróneamente. La mayoría de los políticos nacionalistas que hacia esas fechas no se habían bajado de aquel barco a la deriva, por usar una metáfora marinera tan al uso por aquella época, habían desconectado de la realidad. Ostentaban un sentimiento de impunidad tan desvergonzado que, pocos meses más tarde, a la hora de asumir responsabilidades, contrastaría con sus lloros y sus aseveraciones de que ellos no habían hecho nada, que todo había sido simbólico, una simple *performance* política. El «no se atreverán» fue una fatal arrogancia. Fue una de las negaciones más estúpidas de esta historia, pero no la única.

Así, entre la ignorancia y la arrogancia, iniciaron el golpe al Estado de derecho los días 6, 7 y 8 de septiembre. Se aprobaron las bases jurídicas de la independencia unilateral: la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Fue cuando Puigdemont y compañía cruzaron su particular Rubicón. Abandonaron definitivamente la orilla democrática para adentrarse en la selva autoritaria, acelerando un golpe que ya no era posmoderno. Durante aquellas jornadas parlamenta-

rias se vulneraron flagrantemente los derechos de los parlamentarios de la oposición. En su libro *No todo vale*, el entonces letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, define aquella sesión parlamentaria como «la menos democrática jamás celebrada». Cada uno de los diputados éramos representantes de todo el pueblo catalán, pero al nacionalismo no le temblaba la mano a la hora de pasarnos su despótico rodillo por encima. Fueron días largos e intensos. Nunca esta institución había captado tanta atención mediática. Los diputados constitucionalistas recibíamos decenas de mensajes de apoyo de toda España. Si alguien había pensado que el *procés* no iba en serio, sería entonces cuando se diera cuenta del error. Otra negación fatal. Fueron horas tristes, pero no íbamos a bajar los brazos. Los constitucionalistas estábamos dispuestos a poner el foco sobre la cacicada que allí se estaba perpetrando. El periodista Rafa de Miguel lo definió magníficamente en las páginas de *El País* como «noble filibusterismo». Con el apoyo del reglamento, los portavoces de los grupos de la oposición no buscaban tanto frenar el inevitable atropello como denunciar los métodos antidemocráticos e iliberales del separatismo. Las sesiones se suspendían continuamente y se eternizaban. La épica nacionalista degeneró en un bochorno parlamentario. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, parecía por momentos absorta, ajena a lo que allí acontecía. Estaba sobrepasada. Percibí que ella andaba con la mosca tras de la oreja, como temiendo ser el chivo expiatorio en los planes urdidos por los partidos separatistas. Sin embargo, entre tanto cansancio y desesperación también emergió una esperanza: la coordinación estratégica de los partidos constitucionalistas. Ésta

no sólo iba a darse entre Ciudadanos, PSC y Partido Popular. Los comunes, o una parte de ellos, tampoco querían ser avasallados por la deriva autoritaria del nacionalismo. Nuestros vecinos en las bancadas superiores eran los ilustres diputados de la CUP. Continuamente se mostraban irritados por los procedimientos parlamentarios y democráticos. Ellos querían un golpe rápido. No habían venido a discutir nada con la oposición. Tras aguantar estoicamente sus quejas, el portavoz popular, Alejandro Fernández, se dirigió a ellos y les recordó que «si es necesario, estaremos aquí defendiendo la libertad hasta que el infierno se congele».

Se sucedieron las broncas parlamentarias, las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, las reconsideraciones y las reclamaciones, pero a altas horas de la noche se aprobó la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación. Se había vulnerado el reglamento del Parlament y mucho más. La presidenta de la Cámara y los grupos independentistas ignoraron un acuerdo por unanimidad del Consejo de Garantías Estatutarias que señalaba que no se podía aprobar la ley sin el preceptivo dictamen, como establecía el Estatuto de Autonomía. No iba a quedar ley sin quebrantar durante aquellas jornadas. El mismo Estatuto exige que para aprobar un organismo equivalente a la Junta Electoral Central se precisan 90 diputados. Se aprobó la Sindicatura Electoral con sólo 72. Todo daba igual. Todo menos la *butxaca*. Cuando el Tribunal Constitucional decidió multar a los miembros de dicha sindicatura, gracias a la reforma de la ley del TC que el Gobierno del Partido Popular había promovido dos años atrás, todos los miembros renunciaron rápidamente. Eran revolucionarios de medio pelo.

No contentos con la ley del referéndum, y sin más necesidad que la de exhibir un prepotente radicalismo, los partidos independentistas quisieron repetir la jugada con la Ley 20/2017 de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Entre otras lindezas autoritarias, esta ley pretendía que no se pudiera impugnar ningún decreto ley del Gobierno. También preveía instaurar un Poder Judicial al servicio del presidente de la Generalitat. Se esfumaba la separación de poderes. De haberse implementado esa república, Cataluña habría dejado de cumplir todos los estándares democráticos que se le suponen a un país europeo en pleno siglo XXI. Era un retroceso democrático en toda regla. Ahora entendíamos por qué los políticos independentistas repetían cada minuto que ellos eran demócratas. Necesitaban autoconvencerse, mientras iniciaban un camino sin retorno hacia un despotismo poco ilustrado. No obstante, en el debate de esa ley vivimos un momento parlamentario memorable, la intervención del diputado de los comunes Joan Coscubiela. No le hizo mucha gracia, como después reconocería, que algunos diputados de Ciudadanos y del PP le aplaudiéramos instintivamente al escuchar sorprendidos cómo los comunes abandonaban, por una vez, la equidistancia entre el Estado de derecho y el nacionalpopulismo. En ese preciso instante, la cuestión principal no se dirimía entre la izquierda y la derecha. Era algo previo y más importante. Sus protagonistas no lo reconocerán, y quizá sus seguidores nunca lo sabrán, pero en aquellos momentos el nacionalismo intentaba impulsar un régimen autoritario y nosotros estábamos defendiendo la democracia liberal. Y ese espíritu democrático unía a sindicalistas, como Coscu-

biela, y a liberales clásicos, como un servidor. La idea de democracia que impulsaba el independentismo, ya plenamente populista, no era para nada democrática. Se trataba de una tiranía de la mayoría, de una mayoría que ni siquiera era social, sino simple y coyunturalmente parlamentaria. Bien lo explica el mismo Coscu en su libro *Empantanos*: «Repitieron tantas veces en esas cuarenta y ocho horas que la mayoría, por el simple hecho de serlo, lo puede todo, sin límites legales ni democráticos, que terminaron por creérselo y hacérselo creer a una parte importante de la ciudadanía». Finalmente, y como contraposición al vibrante discurso de su compañero parlamentario, la diputada podemita Àngels Martínez tuvo su minuto de gloria retirando las banderas españolas que los diputados del Partido Popular habíamos dejado sobre nuestros escaños. También dejamos señeras. Éstas ni las tocó. Era España lo que le molestaba.

La fiebre populista había convertido el nacionalismo catalán en un peligro para el marco de convivencia. Más allá de la cuestión identitaria, el *procés* ponía en evidencia un choque entre dos maneras de entender la democracia. Por un lado, los partidos constitucionalistas defendíamos una democracia liberal, moderna y pluralista en una sociedad abierta. Por otro lado, el nacionalismo seguía abrazado a una concepción profundamente iliberal, premoderna y aclamativa que aspiraba a una sociedad cerrada y fácil de controlar, en la que la identidad múltiple desaparecía y todos los individuos debían diluirse en una sola pertenencia. Durante aquellos infames plenos del Parlament eclosionaba en Cataluña esa fractura que hoy divide gran par-

te de Occidente; una falla ideológica que recorre la mayoría de los sistemas de partidos, partiendo tanto la izquierda como la derecha. Es la diferencia entre aquellos que entendemos que la democracia necesita controles y contrapoderes para no degenerar en una tiranía de la mayoría (o de una minoría dura y organizada, como era el caso) y aquellos que la entienden al modo populista, donde cualquier aberración contra los derechos individuales está justificada con el pretexto del mandato popular o democrático (como así lo defienden los portavoces independentistas). Más allá del debate sobre los costes o los beneficios de una independencia prácticamente imposible, la cuestión trascendente que se dirimía aquellos días versaba sobre la cuestión democrática. «Esto va de democracia», solían repetir los políticos independentistas. Era cierto. Ellos habían elegido acabar con ella, situándose en el lado erróneo de la historia. Habían decidido aplicar con toda su crudeza la peligrosa vía populista, la que no respeta la libertad del que piensa o siente diferente. A pesar de su engañosa retórica, el *procés* era antidemocrático, porque se basaba en la voluntad de arrebatar los derechos políticos a los catalanes no nacionalistas y al resto de los españoles. Era limitar la democracia a unos pocos.

El golpe había empezado, pero no todo saldría como estaba previsto en el plan. El 20 de septiembre se produjeron unos sucesos que marcarían el devenir del *procés*. Agentes de la Guardia Civil entraron en el Departamento de Economía con una orden judicial. Era la Operación Anubis, y fueron detenidos catorce altos cargos del Govern. Entre ellos, Josep Maria Jové, persona de la máxima confianza de Oriol

Junqueras y propietario de la famosa libreta Moleskine que tanto ayudaría a la instrucción del caso, ya que confirmaba la existencia del plan que, a pesar de los obstáculos y las chapuzas, estaban tratando de implementar. Aquella mañana, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana llamaron a la masa a concentrarse delante de las puertas de la consejería dirigida por Oriol Junqueras. Los agentes judiciales quedaron literalmente sitiados. Algunos manifestantes destrozaron coches policiales y robaron munición. Ni gente de paz ni revolución de las sonrisas. Habían llamado a «parar a la Guardia Civil» cuando ésta estaba ejecutando una orden judicial. Era una sedición de manual o, mejor dicho, de Código Penal, concretamente, de su artículo 544: «Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Los agentes habían accedido al edificio a las ocho de la mañana, pero no lograrían salir hasta la madrugada. La secretaria judicial lo haría atemorizada por la azotea. La agresividad de la masa era evidente. Estábamos ante un claro ejemplo de lo que acertadamente Daniel Gascón definió como «victimismo matón». La intimidación formaba parte del plan. Recordemos como «Carles Puigdemont pidió que los ciudadanos mirasen a sus alcaldes y les preguntaran si no les iban a dejar votar». Días más tarde, la Audiencia Nacional mandaría a la cárcel a los dirigentes de las organizaciones que habían convocado a miles

de personas a sitiar el Departamento de Economía: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los Jordis.

Pero antes de ello, el golpe a la democracia, iniciado en los plenos de septiembre, continuaría con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Puigdemont llegó a asegurar que el referéndum contaba con el aval de la Unión Europea y Estados Unidos. Nadie en el universo mediático o político del nacionalismo se atrevía a contradecir las mentiras de sus líderes, aunque fueran tan evidentes y fáciles de refutar como ésa. Los profesionales de los medios de comunicación públicos no sólo se dejaron arrastrar por el engaño masivo, fueron colaboradores necesarios de la gran estafa e, incluso, grandes promotores de ésta; y siguen sin pedir perdón ni rectificar. Ya no recuperarán su prestigio. TV3 y Catalunya Ràdio son ya medios ajenos, incluso hostiles, a la Cataluña plural. Todo lo hacían en nombre de la democracia, nos decían, como si ésta fuera votar cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier modo y, además, el resultado pudiera afectar también a todo el mundo. Allí se redobló el golpe. El referéndum ilegal era una parte más del plan que ya se estaba consumando. Del 1 de octubre quedan las imágenes sobre las cuales el nacionalismo trató de desprestigiar al Gobierno de España y sobre las que ahora asienta el cansino relato victimista. Con todo, el impacto emocional de lo vivido durante aquel día no debería esconder que la gravedad del asunto reside en los plenos anteriores del Parlament y en la voluntad de Puigdemont y sus aliados de seguir adelante a pesar de las resoluciones judiciales. Puigdemont fue el máximo responsable al decidir poner en un compromiso a los agentes de los diferentes cuerpos policia-

les y en peligro a una parte de sus seguidores que creían que la independencia era posible. De hecho, los líderes nacionalistas querían que fuera la población quien realizara el trabajo sucio, quien se enfrentara a las consecuencias de saltarse la ley y desobedecer a los tribunales. Fueron unos absolutos irresponsables que condujeron a los catalanes al borde del conflicto civil.

A pesar de las nulas garantías de aquel referéndum, el nacionalismo consiguió las imágenes que quería. El ambiente era irrespirable. La rabia del independentismo se disparó contra la Policía, contra el Gobierno de España y contra los catalanes que nos oponíamos al *procés*. Las redes sociales se llenaron de odio, aunque, en realidad, no había habido más violencia ni más heridos que en los desalojos realizados por los *mossos* de las plazas ocupadas por el movimiento del 15-M. Una de las fotografías que más circularon había sido tomada en Tarragona en 2012. Todo valía. El Departamento de Salud de la Generalitat difundió un informe en el que se contabilizaban 991 heridos. Algunos medios prestigiosos cayeron en la trampa. *The Guardian* rectificaría poco después. El exdirector del periódico británico, Peter Preston, reconoció que «las informaciones sobre lo que ocurrió no se habían comprobado» y que la realidad era que: «Heridos graves aquel día: tan solo dos». Si las informaciones de la Generalitat hubieran sido ciertas, Puigdemont y Junqueras habrían corrido a los hospitales a fotografiarse con los heridos. En TV3 apareció Marta Torrecillas, exconcejal de ERC, que aseguraba que le habían roto los dedos de una mano, uno a uno. Diferentes días, diferentes manos vendadas. Al final, resultó ser sólo una capsulitis. La

mayoría de los considerados heridos eran personas que habían llorado al ver las imágenes en TV3. Lógico, la producción nos mostraba una guerra de Vietnam. El Jordi presidente de la ANC aseguró que no se había producido un balance de heridos tan grande en Europa «desde la Segunda Guerra Mundial». Ni en los atentados yihadistas de aquel verano ni en las guerras balcánicas. El narcisismo nacionalista no tenía límites. Deseaban protagonizar la peor tragedia europea «desde la Segunda Guerra Mundial». Deseaban ser más víctimas que nadie. En otras ocasiones se habían comparado con la población negra sudafricana durante el *apartheid* o con la del estado de Alabama durante el periodo de la segregación. Junqueras era Mandela, Puigdemont, Rosa Parks. La banalización de las luchas por los derechos humanos o civiles fue constante. Sin embargo, la realidad era, una vez más, muy diferente. El balance, como recordó *The Guardian*, no pasaba de dos heridos graves: una persona sufrió un infarto y otra, que con anterioridad había agredido en cinco ocasiones a la policía, acabó perdiendo un ojo por el impacto de una pelota de goma. Pero la posverdad se imponía y las mentiras, si confirmaban prejuicios, eran asumidas como hechos sin ser contrastadas. El aparato de propaganda estaba perfectamente engrasado y la sociedad catalana no podía estar más estresada. Unos sentían rabia; los otros, ansiedad. El *procés* había conseguido convertir Cataluña en una sociedad emocionalmente desgarrada. Durante años el nacionalismo había usado las redes sociales para difundir bulos y amedrentar a la oposición, pero ahora esa estrategia de engaño e intimidación había alcanzado su cenit. Los objetivos eran, por un lado,

reforzar el victimismo que contribuye a que los seguidores nunca exijan a sus líderes una rendición de cuentas. Jugaban en el terreno de las percepciones, mientras el Estado sólo podía situarse en el plano de los hechos. De ahí la victoria propagandística. Por otro lado, la intimidación les servía para mantener la espiral del silencio no sólo sobre la mayoría no nacionalista, sino también sobre aquellos nacionalistas que en algún momento pudieran dudar de la acción o las palabras de sus líderes. El nacionalismo supo usar técnicas del siglo XXI para imponer una ideología del siglo XIX, olvidando todo el daño que estas malas ideas habían producido en el siglo XX.

Saltarse la ley e incumplir resoluciones judiciales tiene consecuencias. Así lo entiende cualquier sociedad democráticamente adulta. Sin embargo, el nacionalismo había tratado a los catalanes como si fueran niños cuyos actos no acarrearán responsabilidad alguna. La infantilización es una de las consecuencias del populismo, por lo que no es de extrañar que el 3 de octubre el discurso del rey Felipe VI provocara un *shock* entre los ensimismados. Trató a los catalanes como adultos. No hubo intento de seducción ni de apaciguamiento. Aquel día se había convocado una huelga general por parte de algunos sindicatos como la CGT, la CNT y el radicalmente independentista Intersindical-Confederació Sindical Catalana (I-CSC), liderado por el terrorista Carles Sastre. Éste fue el asesino de José María Bultó en 1977, fue también uno de los fundadores de Terra Lliure y, cómo no, estaba siendo glorificado en la televisión pública catalana como un «independentista pata negra». Al menos esta vez, CC. OO. y UGT no ejercieron su habitual papel

de tontos útiles de la élite nacionalista. Ésta había llegado demasiado lejos. A la huelga la llamaron «paro de país» y, en cierta manera, recordaba a aquella amenaza que Oriol Junqueras profirió en el Parlamento Europeo en 2013: «¿Alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana?». El revolucionario «cuanto peor mejor» estaba en el *procés* desde sus orígenes, pero aquellos días mostraron claramente cuán poco les importaba la prosperidad de la sociedad que decían defender. Comités de Defensa del Referéndum, los CDR de inspiración cubana, ejercieron una acción coactiva contra los que se oponían a seguir las directrices de unos sindicatos minoritarios. El infantilismo y el narcisismo nacionalistas sólo podían conducir a la frustración y la agresividad. Hubo acoso contra la policía, sobre todo en Pineda de Mar. El ambiente era insoportable para el constitucionalismo, pero esa noche habló el monarca y se produjo un punto de inflexión. Se debía seducir a los independentistas, aconsejaba la equidistancia esnob. Tendrían un helado cada día, prometía el cartel de la ANC. El nacionalismo comparaba la realidad imperfecta del *statu quo* con la posibilidad de un paraíso terrenal. Qué les ofrecía España, se cuestionaban, faltos de amor propio. El discurso del rey los cortocircuitó, y éste pasó a ser el enemigo número uno. Se había dirigido a todos los españoles y tuvo la audacia de explicar simple y llanamente la verdad, pero hubo una frase que fue en especial apreciada por los catalanes que queríamos recuperar la concordia: «Les digo que no están solos, ni lo estarán». No estamos solos. Fue oxígeno puro en medio de la asfixia identitaria.

Sin embargo, el separatismo ni rectificaba ni aflojaba. Y lo que prometía que no iba a suceder con la independencia empezó a ocurrir con la mera posibilidad de ésta. Artur Mas había asegurado que los bancos se pegarían por venir a una Cataluña independiente, pero el 5 de octubre el Banco de Sabadell anunciaba su marcha. El consejo de administración de la entidad bancaria decidió trasladar su domicilio social a Alicante. Pronto la Comunidad Valenciana también daría la bienvenida a La Caixa. En pocos días se esfumó el sector financiero de Cataluña y miles de empresas seguirían el mismo camino. Desde entonces la fuga empresarial, en busca de más seguridad jurídica y menos carga fiscal, no ha cesado, siendo la Comunidad de Madrid la más beneficiada por el nacionalismo catalán. El miedo cundió también entre los pequeños ahorradores. Tanto constitucionalistas como independentistas acudieron a las sucursales bancarias temerosos por sus cuentas corrientes. No pocos formaron colas en Fraga (Huesca) o Vinaroz (Castellón) para crear una nueva cuenta. Otros pidieron al banco abrir cuentas espejo. La locura política no era gratis y Cataluña empezaba a pagar un alto precio.

En medio de aquel bucle de autodestrucción y espoleados por el discurso del rey, la Cataluña constitucionalista por fin reaccionó. Necesitábamos decir basta ya. El nacionalismo había ido demasiado lejos. Así, el 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana (SCC) nos citaba a todos en la plaza Urquinaona, esa plaza que dos años después la *kale borroka* destrozaría orgullosa ante el aplauso de personajes como la exconsejera de Educación Clara Ponsatí. Sí, de Educación. Miles de catalanes fueron por primera vez a una manifesta-

ción. Ya no podíamos más. «Recuperem el seny» era un lema suficientemente transversal. Aquella mañana, cientos de miles de catalanes salimos de casa con una bandera española o una *senyera*. Las dos nos representaban. Nos miramos a los ojos y, finalmente, sonreímos: no estábamos solos. Descubrimos a vecinos que sentían lo mismo que nosotros, la misma angustia ante el fanatismo. Tras un largo silencio, surgió una nueva fraternidad. La Cataluña plural, abierta y cosmopolita despertaba. El diputado y cantante nacionalista Lluís Llach nos llamó buitres a todos los catalanes que aquel día defendíamos la convivencia y la democracia. El nacionalismo siempre tiende a deshumanizar al adversario. Ya señaló George Orwell que el nacionalismo es una manera de clasificar a los seres humanos como si fueran insectos. Bien, aquel día hicimos una metamorfosis. Y salimos a la calle y nos abrazamos y gritamos que no estábamos solos. Caminamos muy poco. Algunos no pudimos pasar de la plaza de Cataluña, quedándonos a más de dos kilómetros de la cabecera de la manifestación. Era increíble. El centro de Barcelona estaba lleno de «buitres», estaba lleno de ciudadanos catalanes libres de nacionalismo, que, a diferencia de las manifestaciones organizadas por la ANC, no seguían consignas. No era una masa homogénea. Al contrario, era un auténtico caos. Ni íbamos uniformados con la misma camiseta ni había cánticos previstos. Sin escenografía norcoreana, todo era espontáneo. Éramos libres. Fue una catarsis. Muchos lloraron, porque era demasiada la tensión acumulada.

No obstante, el nacionalismo se mantuvo ciego ante la realidad plural de Cataluña. Era impermeable a la angustia de

los otros catalanes. Dos días después de aquella histórica manifestación, se produjo uno de los discursos más surrealistas del ya de por sí surrealista proceso independentista. Puigdemont compareció ante el Parlament. Miles de entusiastas esperaban desde el paseo de San Juan una declaración unilateral de independencia. Todo parecía organizado. Aquella mañana salí de la sede del Partido Popular Catalán con Alejandro Fernández y tomamos un taxi hacia el Parlament. Normalmente usaba el autobús, pero ese día había medidas especiales de seguridad. El parque de la Ciutadella estaba acordonado. Recuerdo que en el taxi compartimos nuestra preocupación. No teníamos ni la más remota idea de qué iba a pasar. Habíamos dormido poco. Creíamos que Puigdemont era muy capaz de provocar un conflicto civil. Era un cobarde, como demostraría días después con su fuga a Bélgica, por lo que bien podría declarar la independencia y dejar que fuera la masa fanatizada la que siguiera con el plan, ocupando infraestructuras del Estado o el propio edificio del Parlament. Todos los diputados comimos allí mismo. Era mejor no salir. Diputados de otros partidos constitucionalistas nos transmitían la misma preocupación: no habrá independencia, pero Puigdemont es capaz de provocar un peligroso choque entre catalanes. Sin embargo, al llegar al despacho percibimos que algo había cambiado. Compartíamos pasillo con los diputados de la CUP. La cara de éstos era un poema. Cabizbajos, evidenciaban que aquel no iba a ser el día de la independencia. No obstante, el discurso de Puigdemont fue demencial. En su línea. Empezó, de manera inaudita, reconociendo la pluralidad de Cataluña. Quizá la manifestación de Sociedad Civil Catalana ha-

bía servido de algo. La Unión Europea también había dejado muy claras las consecuencias de la independencia, y las grandes empresas estaban trasladando sus sedes fuera de Cataluña. Quizá «el boig» — así le llamaban en la sede de su propio partido, el loco— había sido iluminado por un haz de cordura. Pero no. Fue elevando el tono. Repitió todos los mantras y todas las mentiras, incluso aquellas que habían quedado olvidadas en otras etapas del *procés*. Y en el punto más álgido de la alocución, cuando parecía claro que iba a declarar la independencia, la declara..., y ocho segundos después la deja en suspenso. O no, porque sus palabras exactas, tras asumir «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», fueron las siguientes: «Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo». En ningún momento el pleno del Parlament suspendió ninguna declaración de independencia, aunque tampoco quedaba claro si ésta se había producido. Retórica ambigua e inseguridad jurídica; era el *procés* en todo su esplendor. Ahora entendíamos la frustración en los rostros de los cuperos. Sin embargo, estos diputados y los de Junts pel Sí firmarían en otra sala del palacio una declaración según la cual se constituía «la República catalana, como Estado independiente y soberano de derecho, democrático y social». No llegarían a registrarla.

La incertidumbre era absoluta y el Gobierno de España tuvo que tomar una decisión que hasta entonces no contaba con el apoyo de algunos partidos constitucionalistas como

el PSOE y Ciudadanos. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, se mandó un requisito previo a Puigdemont para que explicara si había declarado la independencia y, en todo caso, rectificara. Éste contestó con evasivas, miedoso de pinchar la burbuja de ilusión que había creado entre los más radicales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy le envió un segundo requerimiento. Era su última oportunidad para restaurar el orden constitucional, pero Puigdemont seguía oficiando una ceremonia de la confusión. Así pues, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas que, amparadas por el artículo 155, enviaría al Senado.

La cuenta atrás avanzaba imparable. En la madrugada del 25 al 26 de octubre se reunieron en el palacio de la Generalitat el Govern, diputados de Junts pel Sí y aquellos que influían desde la sombra. Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones. Junqueras lo deseaba, pero no podía admitir públicamente que su principal objetivo era ser *president* lo antes posible. Prefería que fuera Puigdemont quien asumiera el desgaste de la rectificación, así que calló. Los silencios del líder de ERC hicieron tanto daño como los lloros de su secretaria general, Marta Rovira. Ésta exigía una declaración unilateral de independencia con todas sus consecuencias. Al final se decidió convocar elecciones, pero el consejero Santi Vila, al que todo el nacionalismo ya consideraba un traidor, se puso exquisito y pidió que el decreto de convocatoria se firmara a la mañana siguiente. No podía hacerse con nocturnidad, alegaba. Fue un error fatal, ya que la espera permitió que se desencadenara una espiral de acusaciones, presiones y golpes en el pecho. Al final, no convocó.